

Belém, epicentro del debate climático: la COP30 pone el foco en justicia ambiental y transición energética

La 30^a edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) tendrá lugar por primera vez en la región amazónica, un escenario que simboliza tanto riqueza ecosistémica como vulnerabilidad frente al calentamiento global.

Entre el 10 y 21 de noviembre la COP30 reunirá a 198 países para abordar el financiamiento climático, la transición energética y la justicia ambiental en el contexto de un sistema multilateral debilitado.

A una década de la adopción del Acuerdo de París que estableció el objetivo de contener el aumento de la temperatura global en 1,5 °C respecto del periodo preindustrial los avances son insuficientes. De hecho, los datos recientes del Observatorio del Clima de Brasil (OCB) estiman que el conjunto de las contribuciones anunciadas hasta ahora podrían conducir a un aumento de hasta 2,7 °C.

Por otro lado, el foro reunirá a comunidades indígenas, campesinas y organizaciones socioambientales de todo el planeta, para demandar que la transición energética incluya implicancias reales para quienes resisten los impactos del modelo dominante.

El financiamiento climático, uno de los temas centrales de la COP30, aún arrastra deudas históricas: el artículo 9 del Acuerdo de París estableció que los países del norte debían movilizar recursos hacia los del sur, pero lo cierto es que los flujos disponibles están por debajo de lo necesario y, en muchos casos, operan bajo la modalidad de préstamos que agravan la deuda ecológica y económica de los países en desarrollo.

La denominada “Hoja de Ruta de Bakú-a-Belém” plantea una meta de 1,3 billones de dólares anuales en financiamiento climático, pero aún carece de definiciones concretas.

La agenda de la transición energética también será clave en Brasil. La noción de “transición justa” introducida en la COP27 vuelve a escena, aunque su implementación concreta sigue siendo esquiva. Uno de los desafíos es el modelo extractivista que persiste en muchos países del Sur global, donde la explotación de litio, minerales y otros recursos para la electromovilidad del Norte está generando nuevos conflictos socioambientales.

En Argentina, por ejemplo, los humedales altoandinos están siendo identificados como ecosistemas clave para la adaptación al cambio climático, pero también sufren presiones derivadas de una lógica extractiva que está lejos de ser considerada “justa”.

La propia arquitectura del multilateralismo climático enfrenta tensiones: la crisis del orden global, el ascenso de gobiernos negacionistas y la creciente influencia de dinámicas geopolíticas hace que la COP30 se sostenga en un contexto mucho más complejo que en 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París.

Para muchas organizaciones de la sociedad civil, el gran reto no es tanto negociar nuevos acuerdos sino asegurar que los ya existentes se cumplan y se traduzcan en cambio real en los territorios.

La COP30 llega con algunas incógnitas: ¿lograrán los países alcanzar compromisos más ambiciosos? ¿Se materializarán los mecanismos de financiamiento para los más vulnerables? ¿Se podrá frenar la lógica extractiva que subyace a muchas propuestas de “soluciones” climáticas? ¿Y qué papel jugará Argentina, cuyo gobierno aún no define su estrategia para la conferencia?

La urgencia es clara: si el mundo no acelera la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y no concreta una transición energética inclusiva, los efectos de la crisis climática sequías, inundaciones, desplazamientos, desaparición de ecosistemas seguirán escalando, afectando con mayor intensidad a quienes menos han contribuido al problema.